



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 27

NOVIEMBRE 2008

Elecciones municipales 2008: Perdió el país, “ganó” el Frente

El 9 de noviembre pasado, en Nicaragua se realizaron elecciones para escoger autoridades municipales. Las votaciones estuvieron precedidas de irregularidades tales como el adelanto del calendario electoral, la suspensión de personerías jurídicas a partidos políticos, retardación en la entrega de cédulas de identidad a los ciudadanos, no acreditación de observadores nacionales e internacionales y un Consejo Supremo Electoral con poca credibilidad. A eso se agregan como antecedentes los conflictos y enfrentamientos entre simpatizantes del partido gobernante y la oposición, la campaña mediática y la utilización de instituciones de administración de justicia contra personas y organizaciones no gubernamentales. Como resultado, el proceso se convirtió en un enorme fraude y ha devenido en una espiral de violencia incontenible.

Un proceso viciado

Las recientes elecciones de autoridades municipales se vieron empañadas por una serie de irregularidades que comenzaron mucho antes de las votaciones, y que han tenido como consecuencia una oleada de violencia política como no se vivía en Nicaragua desde los primeros años de la transición, a inicios de los 90. Estas irregularidades han tenido el propósito de orientar los resultados electorales en una clara dirección: el control del partido gobernante, el FSLN, sobre todos los niveles de gobierno, en este caso, los municipios. La ruta del proceso ha tenido varias fases.

La primera fase tuvo como objetivo “limpiar” las boletas electorales de fuerzas políticas que amenazaran el control hegemónico del FSLN y el PLC de Alemán sobre los votos de los ciudadanos. De ahí que el Consejo Supremo Electoral se dispuso entonces a adelantar el calendario electoral a fin de que los partidos pequeños y de más reciente conformación no pudieran completar los requisitos de inscripción a tiempo; después aprovecharon, en conjunto con la Asamblea Nacional, para posponer las elecciones en varios municipios de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe poniendo como justificación la tragedia del huracán

Félix, y finalmente, la suspensión de la personería jurídica a dos partidos políticos a fin de que no pudieran correr en estas elecciones.

Más adelante, se presentaron retrasos e irregularidades en la entrega de cédulas de identidad a los ciudadanos, abundaron las denuncias de cédulas “clonadas” y de entrega expedita solamente para los simpatizantes del FSLN; además el CSE se negó a permitir observadores nacionales e internacionales, y abrió sus puertas para que los cargos de la institución estuviesen bajo el control del FSLN, desde sus magistrados hasta los presidentes de las juntas de votación.

A estas decisiones se sumó el hecho de que la campaña estuvo plagada de polarización y confrontaciones políticas, de tal manera que se sembró el temor entre los ciudadanos. Para ello, el gobierno promovió la instalación de grupos de “rezadores” en las rotondas de la ciudad capital, los ataques a las manifestaciones públicas opositoras, el ataque sistemático a los medios de comunicación independientes y el acoso contra organizaciones autónomas de sociedad civil.

Mientras recetaba garrotes e insultos a sus adversarios, el partido de gobierno movió su campaña a base de clientelismo político, utilizando para ello programas gubernamentales como el Hambre Cero, Usura Cero y las Calles para el pueblo. Utilizando abiertamente recursos del estado para actividades partidarias, el presidente Ortega repartía

gallinas, cerdos y cocinas junto con los candidatos del FSLN en los diferentes municipios del país. Del lado de la oposición, particularmente el PLC y el candidato para la alcaldía de Managua, Eduardo Montealegre, la campaña giró en torno al llamado: “Todos contra Ortega”, a fin de ganar la mayor cantidad de votos, sobre todo del sector de los indecisos.

A esta iniciativa se sumaron los partidos excluidos, particularmente la Alianza MRS.

Con todos esos antecedentes, y el contexto de polarización y confrontación política del país, la transparencia de las elecciones ya estaba enormemente comprometida para el día 9 de noviembre. Aún así, por encima del temor y los rumores de fraude, los ciudadanos acudieron a las juntas de votación para depositar su voto confiando que prevalecería la voluntad ciudadana como en ejercicios electorales anteriores.

El fraude sin máscaras

No había concluido la jornada electoral cuando los temores del fraude se hicieron realidad. Efectivamente, pasado el medio día los medios de comunicación comenzaron a reportar desde todo el país denuncias de que en numerosas juntas de votación, los presidentes de las mismas puestos por el FSLN, estaban expulsando a los fiscales del PLC ante cualquier protesta, especialmente al momento

del conteo de los votos; igualmente se reportó el cierre anticipado de juntas aún cuando había ciudadanos esperando para ejercer su derecho al voto y la imposición de fiscales y policías electorales nombrados por el FSLN para el control de la cadena de custodia y traslado de las actas y boletas hasta los centros de cómputo municipales y nacional.



El partido de gobierno movió su campaña a base de clientelismo político, utilizando para ello programas gubernamentales como el Hambre Cero, Usura Cero y las Calles para el pueblo. Del lado de la oposición, particularmente el PLC y el candidato para la alcaldía de Managua, Eduardo Montealegre, la campaña giró en torno al llamado: “Todos contra Ortega”, a fin de ganar la mayor cantidad de votos, sobre todo del sector de los indecisos.

Una vez en esos lugares, tanto los fiscales del PLC como los medios de comunicación fueron impedidos de presenciar el conteo de votos, pues un grupo de personas vinculadas con el partido de gobierno se encargaban de autorizar o denegar el acceso de personas al lugar, así como disponer cuáles datos se digitaban primero y cuáles después. Como resultado,

los datos que favorecían a los candidatos pro gobiernistas eran registrados primero y los que no les favorecían eran enviados a revisión, anulados o en muchos casos, manipulados. Así, mientras los simpatizantes del FSLN se adelantaban a celebrar una supuesta victoria electoral, los magistrados del CSE informaban tardíamente resultados incompletos y tergiversados del escrutinio.

La reacción del PLC y particularmente de

Eduardo Montealegre, no se hizo esperar y denunció públicamente el fraude, mostrando las copias de las actas resguardadas por los fiscales liberales. Posteriormente se conocieron denuncias de actas, boletas y cédulas falsas encontradas en basureros de distintas ciudades del país. El CSE inicialmente negó las denuncias de fraude, y más tarde, frente a la irrefutabilidad de los hechos no le quedó más que decidir el recuento de votos en la ciudad capital, Managua. Hasta ese momento, todos los magistrados menos uno, apoyaban la posición oficial del CSE, sin



embargo, poco después, dos de los magistrados liberales no tuvieron más opción que comparecer públicamente reconociendo que los datos publicados oficialmente por el CSE en su sitio web no correspondían con los informes que ellos habían firmado.

La imposición de la violencia

En ocasiones anteriores, el FSLN se había cuidado muy bien de mantener una fachada de legalidad sobre sus decisiones y acciones; sin embargo, en esta ocasión, frente a la imposibilidad de ocultar las pruebas del fraude electoral, decidieron hacer uso de la violencia para impedir cualquier posibilidad de denuncia, oposición o resistencia.

En realidad, esta estrategia comenzaron a utilizarla desde antes del 9 de noviembre, a fin de intimidar y atemorizar a la oposición, en primer lugar, y la ciudadanía en general. Para eso, el FSLN organizó tropas de choque que armados con garrotes, piedras y morteros de fabricación casera (prohibidos por la ley, pero avalados por la propia Ministra de Gobernación), salieron a las calles para impedir manifestaciones y marchas del PLC y de la sociedad civil. Cuando Eduardo Montealegre y otros candidatos que habían corrido por el PLC decidieron protestar públicamente por los resultados electorales, el nivel de la violencia para estatal se extendió y subió de tono. Así, durante las últimas dos semanas, las principales ciudades del país como León y Managua, la capital, han sido el escenario de violentas agresiones contra simpatizantes del PLC, periodistas y ciudadanos.

Las principales víctimas de esta violencia para estatal organizada y dirigida, han sido, en primer lugar la ciudadanía, que ha sido atemorizada y en algunos casos, víctima directa. Los simpatizantes sandinistas prácticamente han tomado control de la ciudad capital, permitiendo

o impidiendo el libre tránsito vehicular y de personas, especialmente en las rotondas; mientras a los empleados estatales se les ha obligado a sumarse a estos grupos para dar la impresión de fortaleza y mayoría en una supuesta jornada de defensa del voto sandinista.

Los medios de comunicación y periodistas también han sido el blanco de la violencia. Ya sea que ejerzan su labor crítica e independientemente o a favor del gobierno, los periodistas han sufrido lesiones y agresiones, de tal manera que ya no pueden realizar su labor sin que signifique un alto riesgo por ello.

La generalidad e intensidad de la violencia política ha desbordado las capacidades operativas de la Policía Nacional. Movilizada desde antes de los comicios a fin de garantizarlos, la racha de violencia ha requerido de la institución el tensionamiento de todas sus fuerzas para mantener el orden. Cuestionada por muchos y urgida por otros, la policía se ha visto colocada en el dilema de qué hacer para garantizar el orden y la seguridad, una situación a la que no se veía enfrentada desde inicios de los 90 con los conflictos por la transición. Finalmente, la jefatura de la institución optó por “garantizar la vida de los ciudadanos” procurando utilizar “técnicas no letales”, según declaró su Directora, Aminta Granera.

El rechazo de diversos sectores a estas manifestaciones de violencia y al fraude electoral no se ha hecho esperar, tal es el caso de los organismos defensores de los derechos humanos, la empresa privada, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación, la jerarquía de la iglesia católica y la cooperación internacional presente en el país. Sin embargo, para los simpatizantes sandinistas y el mismo Consejo Supremo Electoral, las denuncias de fraude y de la violencia son una fabricación de la oposición y de los medios de comunicación.

Los grandes perdedores

Aunque el CSE ya proclamó como ganadores a los candidatos por el FSLN en 105 municipios del país, en estas elecciones el país entero ha perdido. Perdió la democracia y perdió la gobernabilidad. En primer lugar, porque el derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes, pilar fundamental de cualquier régimen democrático, ha sido desprestigiado y deslegitimado completamente. La confianza ciudadana en el poder de su voto se ha perdido totalmente, invalidándolo como mecanismo de primer orden para la resolución pacífica de controversias en un régimen democrático.

Pierden los procesos genuinos de descentralización, participación y fortalecimiento de la autonomía municipal que se habían venido desarrollando en todo el país durante los últimos años. Los proclamados ganadores gozarán de una autoridad espuria, pues la verdadera legitimidad otorgada por la confianza y el reconocimiento de la ciudadana se ha perdido.

El segundo gran perdedor ha sido el gobierno y el propio FSLN, pues aunque por un período de tiempo logren controlar la inconformidad ciudadana y a la oposición sobre la base de la violencia y el temor, la animadversión que están provocando entre la ciudadanía es muy grande. A la larga, las demostraciones de violencia constituyen más bien pruebas de una gran debilidad e incapacidad del gobierno para manejar los conflictos y las crisis por métodos institucionales y democráticos. En realidad, la crisis no se resuelve con la proclamación de los ganadores, sino que pasa a otra dimensión donde los diferentes poderes del Estado se verán enfrentados, agudizando la crisis de gobernabilidad del país. Adicionalmente, el gobierno se verá enfrentado a un creciente aislamiento y las presiones de la comunidad internacional, que seguramente tendrá repercusiones económicas en



términos de la cooperación y los flujos de inversión en el país.

En estas elecciones también ha perdido el Consejo Supremo Electoral. Cuestionado y con un elevado porcentaje de desconfianza ciudadana, el Consejo quedó completamente desprestigiado en el cumplimiento de sus funciones con estas elecciones. El anuncio oficial de los resultados electorales pretende poner la tapa al pomo del fraude, sin embargo, en realidad revela que el proyecto de control partidario bipartidista sobre las instituciones públicas que tanto el PLC como el FSLN habían venido promoviendo a través de su pacto político, ya no es funcional, pues los magistrados del PLC se han convertido en socios minoritarios frente al FSLN, que es en realidad quien controla el Consejo Supremo Electoral. Este mismo y desprestigiado Consejo deberá enfrentar ahora el potencial explosivo que tendrán las pospuestas elecciones en varios municipios de la RAAN.

Otro de los grandes perdedores es Arnoldo Alemán. Nunca como hoy su liderazgo en el liberalismo se encuentra en peligro. De hecho, los acontecimientos han colocado al Dr. Alemán entre la espada y la pared, y le ha planteado un dilema personal entre mantener

A Montealegre le queda entonces demostrar que es capaz de renovar al PLC, establecer una nueva cultura política y un nuevo liderazgo dentro de su partido y sustraerlo de la condición de rehén al que está sometido por el pacto Ortega-Alemán.

su pacto político con el presidente Ortega o mantener el control del partido. Si escoge mantener el pacto, se queda sin el respaldo del PLC, especialmente de las bases que han visto con estupefacción cómo se perdieron sus votos; si escoge mantener el control del partido, entonces tiene que romper el pacto y exponerse en su condición de rehén político de Ortega. Una alternativa intermedia en la que se haga una nueva transacción entre los dos caudillos no se ve factible, pues la mayoría de los liberales se niegan a ello. Como sea, ninguna de las alternativas que escoja lo libera de la responsabilidad que tiene en la situación actual.

No todo está perdido

Los acontecimientos electorales auguran, sin dudas, un futuro funesto para el país. Hay muchas evidencias que apuntan en esa dirección. Sin embargo, se avizoran también las perspectivas de cambios estratégicos. Una de las más importantes se relaciona con el surgimiento de un nuevo liderazgo político para el país.

En ese sentido, la posición firme de Eduardo Montealegre al denunciar el fraude públicamente le ha dado una nueva dimensión a su liderazgo. Montealegre le disputó la presidencia a Daniel Ortega en las elecciones del 2006 y esta vez decidió correr como candidato a la alcaldía de Managua, de acuerdo a otros análisis políticos, perder esta elección significaba su entierro político. Sin embargo, ha ocurrido exactamente lo contrario, pues se ha fortalecido más como líder entre los liberales, tanto entre las bases del partido como frente a los líderes intermedios, desplazando prácticamente a Arnoldo Alemán. Eso está bien para los liberales, pero no es suficiente para el país. A Montealegre le queda entonces demostrar que es capaz de renovar al PLC, establecer una nueva cultura política y un nuevo liderazgo dentro de su partido y sustraerlo de la condición de rehén al que está sometido por el pacto Ortega-Alemán. Los demás partidos políticos tienen un reto similar, especialmente el MRS.

Mientras tanto, el resto de la sociedad tiene como reto la construcción de un frente amplio de oposición que logre aglutinar a la mayoría de la población en defensa de la democracia y de sus derechos ciudadanos. Esta es una tarea urgente en la que deben confluir las energías la empresa privada, la sociedad civil y los mismos partidos políticos antes que la única alternativa para el país sea volver a la guerra fratricida. Nicaragua no puede esperar.